



## 7. INDEPENDENCIA

*"Es indispensable para seguridad de cada individuo y para la libertad de todos, que el Poder Judicial esté separado de los otros..."*  
**(ALEXIS DE TOCQUEVILLE)**

### 7.1. EL VALOR DE UN PODER JUDICIAL INDEPENDIENTE

En un sistema republicano de gobierno como es el nuestro, la independencia del Poder Judicial es uno de los principios básicos sobre los cuales descansa la división de poderes y el sistema democrático. En este sentido, la Ciencia Política ha demostrado que el Poder del Estado tiende a devenir en abusos cuando se prolonga en el tiempo y se centraliza en pocas personas e instituciones.

En aras a evitar dicha tendencia, el principio constitucional que impone la división de poderes asigna a cada Poder del Estado una competencia específica, en algunos casos compartida con otros, mientras que en otros supuestos es ejercida por uno solo de modo exclusivo y excluyente<sup>1</sup>.

En los últimos tiempos las sospechas por parte de la opinión pública respecto a la falta de independencia de algunos magistrados federales ha adquirido dimensiones verdaderamente alarmantes (así lo ha demostrado el relevamiento de la información periodística) amenazando muchas veces con el colapso del sistema.

La confianza de la ciudadanía en la Justicia parece ser cosa del pasado. El común de la gente no confía en ella, siendo la justicia Criminal y Correccional Federal la que en los últimos tiempos ha sido objeto de mayores críticas, tanto en el ámbito funcional como en lo relativo a su falta de independencia y de decoro.

---

<sup>1</sup> En este orden de ideas, es interesante recordar que según el criterio de Juan Carlos CASSAGNE, las funciones de los órganos del Estado deben encararse no tanto por el origen formal del órgano de donde emanan, sino más bien por el contenido del acto de gobierno. A modo de ejemplo, el juicio político es un acto materialmente jurisdiccional que lleva a cabo el poder legislativo, mientras que los decretos de necesidad y urgencia son actos materialmente legislativo, no obstante emanar del Poder Ejecutivo.

La sospecha ciudadana de falta de independencia de quienes tienen a su cargo la delicada tarea de impartir justicia a sus conciudadanos, en lugar de colocarlos en la noble tarea de garante de sus derechos constitucionales, los coloca en una situación delicada.

Es por ello, que los esfuerzos de los diversos sectores de la sociedad, deberán centrarse en lograr un sistema judicial que actúe como una verdadera tutela efectiva, donde se asegure la independencia de los magistrados de la justicia criminal y correccional federal.

La limitada autonomía que parece caracterizar al fuero Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, por lo menos en la esfera de la opinión pública, permite en principio sostener la necesidad de robustecer un poder judicial que adquiriera la capacidad de limitar la influencia que los otros poderes del gobierno han pretendido tener siempre sobre él.

## 7.2. MALOS ANTECEDENTES

Es cierto que la situación que afronta el fuero federal en la actualidad es verdaderamente crítica. Ahora bien, para ser objetivos debemos tener en cuenta que la situación actual no se ha producido de la noche a la mañana, sino que es el fruto de diversas circunstancias y concesiones poco felices.

A lo largo de los diversos gobiernos que últimamente han pasado por nuestro país, ninguno ha asumido la problemática de la justicia con profunda preocupación. Ninguno ha encaminado una reforma estructural del sistema.

Así el Gobierno del Proceso no fue capaz de producir los cambios necesarios en la Justicia, por lo que **fores** mantuvo una posición crítica expresada en documentos y declaraciones.

Con el advenimiento de la democracia, el Presidente Raúl Alfonsín, no les dio acuerdo a los magistrados que habían sido designados durante el gobierno militar, produciéndose un vaciamiento de la institución judicial y su consecuente politización.

En aquella oportunidad, **fores** bregó por la idea de una campaña de estabilización de los jueces en sus cargos, mediante una declaración que fue ampliamente difundida por la prensa de todo el país. Entonces, proponíamos que se confirmara íntegramente al actual elenco de magistrados y se procediera a remover de su cargo a los cuestionados mediante el juicio político que prevé la Constitución para fortalecer a las instituciones de la democracia e impedir la politización de la justicia.

Lamentablemente en aquel entonces, se hizo todo lo contrario a lo que proponíamos y hoy estamos padeciendo esas consecuencias. Alfonsín no dio acuerdo a los jueces del gobierno anterior, con lo cual creó un mal precedente. Con esto, el actual presidente Menem se sintió con derecho a hacer lo propio con la Justicia Federal que hoy tenemos. En definitiva, malos precedentes y una serie de oportunidades perdidas.

### 7.3. CONCLUSIONES PRELIMINARES EN TORNO A LA INDEPENDENCIA

Conforme fuera explicitado en el Capítulo anterior, la construcción teórica permite "a priori" llevar adelante una primera medición sobre la independencia de los jueces, en este caso de los criminales y correccionales federales de la ciudad de Buenos Aires. Para ello se han incorporado en el anexo dos cuadros, uno que incluye un número de variables de información sobre cada uno de los jueces federales (fecha y duración de sus funciones, algunos antecedentes, pedidos de juicios políticos y los casos más resonantes) y otro con la cantidad de pedidos de juicio político que se formularon a jueces criminales y correccionales de la Capital Federal antes de 1983 y a partir de ese año.

La información reunida en definitiva, a nuestro criterio resulta insuficiente para realizar una medición sólida y objetiva sobre este tópico.

En especial se constituye en un obstáculo que gran parte de ella proviene de la prensa, y que en muchos casos carece del rigor técnico -en cuanto al detalle de la información que brindan- como para realizar la medición con tales elementos.

No obstante ello, una primera lectura del análisis de tales antecedentes y del material tanto periodístico, como de archivo y otras publicaciones recolectado, permite sostener que en estos últimos años el poder y la importancia que reviste el fuero en estudio ha aumentado en forma considerable. Su presencia diaria en los medios, la magnitud de los casos que los ocupan, como así también las publicaciones editadas respecto de sus integrantes y casos más resonantes, lo demuestran. En igual sentido la creciente cantidad de juicios políticos que se han formulado contra estos magistrados demuestra, la trascendencia política de estos jueces y su labor. Estos pedidos si bien muchos responden a casos reales de mal desempeño o posible comisión de ilícitos -como en el caso de Branca- otros parecen haber tenido por único objeto ejercer presión sobre los magistrados.

La segunda conclusión preliminar y a ella llega la investigadora de Stanford, Rebecca A. Bill es que *"los primeros indicadores sugieren que durante los últimos años la justicia federal pareció estar en alguna medida subordinada al ejecutivo, y tramitar los procesos sin afectarlo. Algunos casos como el "Yomagate" y otros tantos han marcado esa tendencia, que parece confirmarse por los antecedentes y los referentes de los jueces designados. De todas formas, es importante recalcar que es necesario detenerse en cada uno de los jueces y no caer en generalizaciones, pues también es evidente que el grado de independencia que tienen no parece ser el mismo. Por ejemplo Gabriel Cavallo, pese a reconocer a la Dra. Riva Aramayo como su referente, se ha mostrado independiente. Esto sirve además para reafirmar en el marco teórico que uno no puede considerar solo un indicador sino que es necesario analizarlos en conjunto y con datos precisos..."*<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Esta parte es una versión adaptada y traducida de un borrador en estudio, que servirá de sustento para futuras investigaciones de esta institución cuya finalidad será avanzar en mediciones sobre la independencia de los jueces.

A continuación se incorporan otras cuestiones que surgen del análisis efectuado

- ❖ Desde la opinión pública (reflejada en las encuestas y en la prensa) se advierte una seria preocupación y una creciente insatisfacción en torno al sistema judicial argentino.
- ❖ De modo particular, los mayores cuestionamientos (sobre todo en la prensa) están direccionados hacia el fuero en lo criminal y correccional federal, por su falta de independencia del Poder Político.
- ❖ La creación de los nuevos juzgados federales, parece a priori no encontrarse justificada en un análisis de casos que justifique tal creación, si bien esto es una característica común de la falta de política judicial que imperaba en el país, lo cierto es que era evidente que existían necesidades mayores.
- ❖ Esto y la restante evidencia, permite sostener que las posibles interferencias y presiones parecen tener más efecto en los juzgados nuevos (con excepción del Juzgado N° 9) cuyos titulares fueron designados en este contexto.
- ❖ La falta de independencia condiciona necesariamente el desempeño del fuero en estudio. En este orden de ideas, se ha determinado en la parte correspondiente de esta investigación, la falta de elevación a juicio de las causas más delicadas socialmente y que involucran inmediata o mediatamente al poder político (delitos contra la administración pública -ver anexo estadístico. Análisis de Delitos contra la Administración Pública).
- ❖ El porcentaje de elevaciones a juicio en los delitos contra la administración pública es inferior al promedio de elevaciones a juicio en general.
- ❖ La demora en la tramitación de los delitos contra la Administración Pública (ver al respecto el análisis de causas pendientes) es mayor que en el resto de los procesos tramitados.
- ❖ Si bien la politización de este fuero parece haber existido desde siempre, la evidencia permite afirmar que la misma se ha incrementado a partir de 1983 y que la tendencia es ascendente.

#### **7.4. MODOS DE ASEGURAR LA INDEPENDENCIA DE LOS JUECES**

Mucho puede hablarse sobre la necesidad de contar con los beneficios de un Poder Judicial independiente y sobre las ventajas que esto trae aparejado. Sin embargo, lo esencial será asegurar en la práctica la efectiva vigencia de esta garantía constitucional. De lo contrario, contaríamos con una disposición meramente declaratoria, dogmática y abstracta.

Los modos más efectivos para asegurar la independencia de los Magistrados Federales, son: a) Asegurar la transparencia de los procesos de selección de jueces para garantizar efectivamente que accedan al cargo los mejores; b) Prever el funcionamiento de un adecuado sistema de control sobre la actuación de los magistrados, sin menoscabar su independencia, c) transparentar la información relativa al desempeño de los magistrados (difundir indicadores de costo y desempeño) y d) la elaboración de eficaces sistemas de remoción.

Estas premisas, han fracasado en la realidad argentina.

El modo de selección de los jueces ha dejado mucho que desear en los últimos tiempos. El cargo de Juez ya no es concebido como el mérito de una trayectoria en el sistema.

En este orden de ideas, si comparamos los requisitos que deberán contar los postulantes a concursos del Consejo de la Magistratura, podremos concluir que de los antecedentes de muchos de los actuales magistrados, no todos estarían en condiciones de acceder a los actuales requisitos.

Cabe reconocer que en el sistema actual, gran parte de la responsabilidad en el mecanismo de selección de los jueces corresponde al órgano legislativo, el que con su acuerdo a convalidado las actuales designaciones.

En otro orden de ideas, se carece de un control adecuado sobre el desempeño de los diversos Magistrados. En este sentido, salvo algún llamado de atención de la Cámara de Apelaciones sobre algún caso en particular y en relación con un expediente concreto, se carece de un registro sobre el desempeño de los magistrados.

Por otro lado, el juicio político como instrumento de destitución de los Magistrados que incumplieron con el requisito constitucional de la buena conducta en su cargo para conservarlo hasta la jubilación, se ha mostrado del todo ineficaz, por las dificultades para obtener las mayorías necesarias en el Congreso, e incluso por su utilización, en numerosas ocasiones, como un medio de presión política.

Por otro lado, es común que la gente considere que solamente es causal de juicio político la comisión de delitos en el ejercicio del cargo, perdiéndose de vista que el mal desempeño del cargo es una causal poco explorada y no reglamentada. Así, existe en nuestro sistema jurídico una zona gris entre el nombramiento del Magistrado y su remoción tras su participación en un escándalo. Se carece de un código de ética judicial, que regule el comportamiento digno de los Magistrados y se proceda a la destitución de aquellos que no se han desempeñado decorosamente.

Por otra parte, un juez que se desempeña con poca eficiencia en el cargo, puede no ser un corrupto; es más, puede ser en la esfera personal y humana una bellísima persona, pero no estar en condiciones de actuar como Juez de la Nación.

Es evidente que este tipo de condiciones debe estar acreditadas al momento de su designación, con lo cual el recaudo de la independencia en la remoción nos remite necesariamente a su selección. En este orden de ideas, la información periodística revela que algunos de los actuales magistrados federales se han desempeñado con anterioridad como funcionarios de algunos de los actuales políticos influyentes en el poder.

Asimismo, en cuanto al control de desempeño del sistema judicial, no existe en los tribunales de alzada un registro sobre la cantidad de sentencias revocadas, con lo cual las

Cámara se limitan a anular determinado procedimiento sin tomar ningún tipo de medida contra el juez que actuó ineficazmente.

En definitiva, para asegurar efectivamente la independencia de Poder Judicial, se impone la necesidad de asegurar la independencia de los jueces, mediante la:

- Selección de los mejores
- Control de desempeño
- Elaboración de un Código de Ética Judicial
- Mecanismos eficaces de remoción

